

# Neuquén: reclamos, protestas y represión

La feroz represión policial a la protesta de los docentes en la provincia de Neuquén, al sur del país, que se cobró la vida del profesor Carlos Fuentealba vino a resaltar la persistencia de una metodología propia del terrorismo de estado, acrisolada en estos 30 años, por la prolongada impunidad que hemos vivido. Que las fuerzas especiales de la represión policial actú-



en de este modo no es por excesos profesionales. El mismo presidente Kirchner calificó al crimen de fusilamiento, por la alevosía con que el asesino terminó con la vida del maestro. La primera responsabilidad es del poder político, que sustenta su defensa no en el debate democrático ni en la confianza de la participación ciudadana, sino en el aparato represivo, que tal como se repite en distintas provincias argentinas, lejos de haber sido disuelto fue fortalecido con planes de estudio donde prevalece la doctrina de la seguridad nacional por sobre el crecimiento en conciencia acerca de los derechos humanos.

Más vigente que nunca es la exigencia de la apertura de todos los archivos policiales y de otras áreas de los estados provinciales vinculadas a las violaciones de los derechos humanos, así como el desmantelamiento de los aparatos represivos y la implementación de planes de estudios en las estructuras policiales, militares, de seguridad y penitenciarias, basados en presupuestos filosóficos y políticos que acrecienten el respeto de las personas y la convivencia democrática en solidaridad, justicia y libertad.

Estas fueron las consignas que mayoritariamente se expresaron en las grandes movilizaciones de la pascua laica, que se enlazó a la pascua cristiana, en el vía crucis, el mismo viernes santo por las calles de la martirizada provincia sureña.

Los reclamos y las protestas de los docentes, maestros y profesores, de todo el país son en sí mismos una denuncia de la degradación educativa sufrida en los largos años del reinado del neoliberal, que desmanteló al estado de sus principales responsabilidades. Las escuelas se fueron transfiriendo de la nación a las provincias y de las provincias a los municipios, en una descentralización administrativa condenada a manejarse sin recursos ni presupuesto adecuado. Ello también potenció la mercantilización de la educación privada. Mientras, en forma paralela se fue concentrando la recaudación impositiva en el gobierno nacional, quedando a su arbitrio una distribución desigual que debilita la estructura federal del país, natural y necesaria por su extensión territorial, diver-

sidad cultural y el diferente desarrollo de sus economías regionales, que tampoco significa desconocer el manejo feudal de provincias favorecidas por las regalías petroleras, que acentúan el clientelismo consolidando el poderío de las plutocracias locales con las mayorías empobrecidas que se ven obligadas a emigrar a los grandes centros urbanos. Esta es la ten-

sión constante entre el manejo del gobierno central que debe garantizar la integración nacional, y el respeto y la vigencia de las autonomías provinciales, que al carecer de mecanismos realmente democráticos alimentan las desviaciones hegemónicas.

No se pueden dilatar respuestas a estas realidades de la política nacional. Combatir el neoliberalismo exige además de reposicionar el rol activo del estado en la gestación de las políticas públicas, medidas concretas en cada una de sus áreas: salud, vivienda, redes viales, recursos hídricos, políticas previsionales y asistenciales, y educación.

En este rubro el estado nacional debe encaminar políticas acordes al proyecto de país que se intenta diseñar e implementar. No puede el Ministerio de Educación ser sólo el administrador de edificios escolares. Su rol es impulsar una política educativa que acreciente la conciencia ciudadana, favorezca espacios participativos, consolide las responsabilidades solidarias y sienta las bases de una nueva cultura inclusiva y dignificante de la condición humana y su vocación comunitaria.

El estado nacional debe también asumir su responsabilidad en la crisis social que se viene expresando en el reclamo de la comunidad educativa. No se trata sólo de los sueldos de los maestros, por más que ellos sean imprescindibles para la dignificación de su tarea. Es fundamentalmente la previsión y el destino de esfuerzos humanos y recursos materiales para la planificación y ejecución de una política educativa, que asumiendo la realidad, extensa y diversa del país, sea capaz de construir una conciencia colectiva de participación y protagonismo, que integre, promueva y potencie la ciudadanía.

Y desde lo educativo, se aporte a los imprescindibles cambios culturales necesarios para revertir los valores introducidos por el neoliberalismo con conductas individualistas y antisolidarias, que nada tienen que ver con esa identidad nacional y popular que el terrorismo de estado quiso borrar de nuestra memoria para consolidar los privilegios de las minorías. (Luis Miguel Baronetto).